



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES
SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 298

7 de junio de 2018

Pág. 1

**COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.^a MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ

Sesión celebrada el jueves, 7 de junio de 2018

ORDEN DEL DÍA

- Acuerdo sobre escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (número 97 de registro de entrada de la Comisión) de modificación del plan de trabajo. (*A puerta cerrada*). (Núm. exp. 650/000002)

Comparecencias

- Comparecencia de la periodista D.^a Marisa Bernal Gallero, ante la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Núm. exp. 715/000516)
Autor: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos

Núm. 298

7 de junio de 2018

Pág. 2

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

En primer lugar, pregunto si se puede aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de mayo de 2018, puesta a disposición de los miembros de la comisión en la secretaría de esta.

¿Puede darse por aprobada? (*Asentimiento*).

Queda aprobada. Muchas gracias.

- ACUERDO SOBRE ESCRITO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO NÚMERO 97 DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA COMISIÓN, DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

(Núm. exp. 650/000002)

La señora PRESIDENTA: Con carácter previo, y teniendo en cuenta el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de modificación del plan de trabajo, les propongo modificar el orden del día de esta sesión para considerar, en primer lugar, el siguiente punto: Acuerdo sobre escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con número 97 de registro de entrada de la comisión, de modificación del plan de trabajo, en relación con el plazo de funcionamiento de la comisión.

¿Lo acuerda la comisión? (*Asentimiento*).

Así queda aprobado. Muchas gracias.

Y someto a su consideración, como siempre que tratamos el plan de trabajo, que este punto se tramite a puerta cerrada. (*Asentimiento*).

Así se acuerda.

Continúa la sesión a puerta cerrada.

Se reanuda la sesión pública.

COMPARECENCIAS

- COMPARECENCIA DE LA PERIODISTA D.^a MARISA BERNAL GALLERO, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.

(Núm. exp. 715/000516)

AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos en sesión abierta.

Me corresponde dar la bienvenida a doña Marisa Bernal Gallero en nombre de los miembros de la comisión, de los miembros de la Mesa y en el mío propio. Comparece ante esta comisión de investigación, que se creó en virtud de acuerdo del Pleno del Senado adoptado el pasado día 5 de abril de 2017. El objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, es analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación y la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en el sistema normativo, y proponer soluciones legislativas adecuadas.

Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras. De conformidad con dicha ley, y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar en relación con el objeto de la investigación parlamentaria a que me he referido anteriormente, quedando sujeta la compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello, naturalmente, sin perjuicio de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, en virtud de lo establecido en aquella ley, ha sido informada de la posibilidad —y no ha hecho uso de ello— de comparecer acompañada de persona que le asista.

Señora Bernal, en cuanto al desarrollo de la comparecencia, tiene carácter público, como he dicho al comienzo de mi intervención, en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento

del Senado, y la compareciente contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios.

En este sentido, paso a dar la palabra al senador Yanguas, portavoz del Grupo Mixto.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero dar la bienvenida a la compareciente al Senado y a esta comisión de investigación y decirle, como vengo haciendo en todas y cada una de las comparecencias, que como portavoz del Grupo Mixto represento a una serie de partidos y de senadores y senadoras que tenemos una visión diferente sobre esta comisión de investigación. En su día acordamos que el Grupo Mixto se abstendría en todas las votaciones, cosa que vengo haciendo, y que no haría preguntas a ningún compareciente, cosa que, por lo menos en mi caso, como representante y portavoz también de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, vengo respetando y haciendo. Yo se lo voy a poner muy fácil: no le voy a hacer ninguna pregunta, aunque escucharé lo que aquí tenga que decirnos.

Nada más. Muy buenas tardes.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Yanguas.

En ausencia del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; en ausencia del Grupo Vasco en el Senado; en ausencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; en ausencia del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y en ausencia del Grupo Socialista, le doy la palabra al senador Aznar, portavoz del Grupo Popular.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer a la compareciente su presencia, que estoy seguro de que nos va a ser de gran utilidad. Para entrar en materia: su nombre completo es Marisa Bernal Gallero, aunque usted firma como Marisa Gallero, ¿verdad?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Efectivamente. Siempre firmo todos los artículos como Marisa Gallero.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Entonces, si le parece, me voy a dirigir a usted como Marisa Gallero o señora Gallego.

Háganos un brevísimo repaso de su dedicación profesional en este momento.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Yo trabajo en ABC y escribo artículos, tanto de investigación como entrevistas, aparte de tener una columna. Llevo en ABC desde noviembre de 2014. Antes estuve dirigiendo *Las mañanas de Cuatro*. También fui productora ejecutiva de *Las mañanas de Cuatro* en la época de Concha García Campoy. Dirigí *Las mañanas de Cuatro* junto a Marta Fernández, y luego con Jesús Cintora. Posteriormente, pasé a dirigir un programa de la tarde, que se llamaba *Te vas a enterar*, en Cuatro. O sea, que he estado muy vinculada al mundo de la televisión, hasta que salté a la prensa escrita, con ABC. He escrito un libro de investigación, que casi todo el mundo conoce: *Bárceñas. La caja fuerte*. Y, por otra parte, me dedico también a hacer entrevistas sobre la época de la transición. Este podría ser un resumen.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muy bien. Resumido, pero muy potente, por decirlo así.

Usted, por lo tanto —y es por lo que la conocemos—, se ha dedicado básicamente, aparte de la etapa de televisión, a los trabajos de investigación periodística. Por eso, repito, la conocemos.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted ha realizado un trabajo periodístico de investigación sobre la instalación de desaladoras durante la etapa del Gobierno del Partido Socialista, cuando el señor Rodríguez Zapatero era presidente. ¿Es así?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Efectivamente; ese fue el primer artículo que publiqué del caso Acuamed en referencia a las desaladoras. Dentro del sumario del caso Acuamed, en un informe de la UCO, de la Guardia Civil, se destapa una campaña publicitaria del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para promocionar esas desaladoras. Eso me llama la atención. En ese informe entra esa información porque

estaban investigando una de las desaladoras, ya que del dinero que supuestamente se donó voluntariamente se estaba pidiendo el reembolso. Con esa información sobre la desaladora —una de la que más dinero puso, 1 740 000 euros, para la publicidad— se empieza a investigar porque esa supuesta mordida se estaba reclamando. A raíz de ahí empiezo a descubrir que el mundo de las desaladoras es muchísimo más amplio. El primer artículo que publico, que aporto aquí, se llama «El caso Acuamed» y destapa esta campaña publicitaria de 7,5 millones de euros y fue el primero que abrió esta investigación del tema de las desaladoras.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Como consecuencia de la investigación a la que usted se refiere, hay varios artículos que siguen al que ha citado.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En ellos se relatan las distintas campañas publicitarias multimillonarias, por lo que ya hemos oído, que se hacen en la época del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Díganos, explíquenos en qué consistían esas campañas.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Básicamente, si se empieza a ahondar en ese informe de la UCO, que está dentro del sumario del caso Acuamed, se descubre que hay un gasto desproporcionado en campañas publicitarias. Y no lo digo yo, sino que lo marca el dinero que se refleja en las cuentas de la empresa pública perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, de Acuamed, durante los años 2007 y 2008. En el artículo que les muestro se refleja la evolución, y es llamativo: vemos que en 2007 sube a 7,5 millones —es como yo título el artículo—, pero que en 2008 se gastan aproximadamente otros 4 millones de euros. Estamos hablando de que entre los dos años en que hubo elecciones municipales, autonómicas y generales el compendio de gasto público —porque la empresa es estatal— fue de 11,2 millones de euros. Me parece un gasto desproporcionado de fondos públicos. Pero ¿qué resulta? Que ese es el dinero que está en las cuentas de Acuamed; no está reflejado lo que decía el informe de la UCO. ¿Qué dice el informe de la UCO? Que constructoras también donaron 7,2 millones de euros en un periodo de seis meses para esa campaña de publicidad. Para entender un poco esta cantidad —yo he hecho investigación sobre la caja B, que acaba de acreditar la sentencia de Gürtel, del Partido Popular—: son 8,3 millones de euros en dieciocho años, desde 1990 hasta 2008. Estoy hablando de que en menos de seis meses entraron 7,2 millones de euros para gastos de publicidad, donados voluntariamente por constructoras.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La verdad es que las cifras son mareantes. Vamos a ver si logro entenderlo bien. Usted nos está enseñando un...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Este es un gráfico que hace la UCO, la Guardia Civil, con las cuentas a las que yo he tenido acceso. Y he ido comprobando cada uno de los datos que he podido para decir: ¿de dónde sale esta cantidad? Tanto los 7,5 millones como los 3 800 000 euros —casi 4 millones de euros— salen de las cuentas públicas, de un apartado que hay dentro de esas cuentas públicas de Acuamed, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, que se llama de propaganda, publicidad y relaciones públicas. Justifican esa cantidad con esto. Pero uno ve que luego baja, y a partir de 2010 la propia UCO dice que vuelve a niveles normales; niveles normales son que a partir de 2010 se gastan 200 000 euros. Y no lo digo yo, se ve claramente en el gráfico la cantidad de dinero que se gastaron tanto en 2007 como en 2008. Y vuelvo a decir: periodos electorales; elecciones municipales, autonómicas y generales.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien, ahora lo entiendo. Le voy a hacer dos preguntas. Una: me imagino que no habrá inconveniente en que luego deje todos los documentos que va exhibiendo a la Presidencia de la comisión.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No, ningún problema.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perfecto. Para entendernos: Acuamed viene gastándose en publicidad una media de 200 000 euros.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Efectivamente.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y, de repente, en el año 2007, con continuidad en el año 2008, pasa a gastar... ¿cuántos millones?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Calculando lo que son fondos públicos, 11,2 millones de euros, más las donaciones voluntarias —vamos a decirlo como lo dicen ellos— de las constructoras, que son 7,2 millones, 18,5 millones de euros en dos años.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que de un gasto habitual, anual, de 200 000 euros, se pasa en época electoral —2007 y 2008— a gastar entre el dinero público auténtico y el dinero que voluntariamente —pongo comillas— donan las constructoras de las desaladoras una cifra global aproximada de 18 millones.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): De 18,5 millones de euros. Hice el cálculo, sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Estas campañas —estamos hablando de 2007 y 2008— se producen ya en una época en que la crisis, como mínimo, asomaba la patita, si me permite la expresión. Si no se había instalado plenamente en España, en el año 2007, si mal no recuerdo, la crisis ya estaba anunciando su llegada.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Esta campaña y este gasto desproporcionado, porque me parece que 18,5 millones de euros es un gasto desproporcionado en publicidad de una empresa pública para contar las bondades de la desalación —¡ojo!— de desaladoras que no estaban construidas, porque ese es el otro punto. Estamos hablando de que el real decreto que aprueba el ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona en el año 2004 contempla una serie de actuaciones a lo largo de la costa mediterránea, y casi todas ellas son adjudicaciones de desaladoras. Ese real decreto se enmarca con carácter prioritario, extraordinario y de urgencia, con lo cual son actuaciones que se supone que se tienen que realizar con rapidez porque son necesarias y, sobre todo, porque también se llevó a cabo la anulación del trasvase del Ebro. Ese fue el real decreto de 2004; y en 2007-2008 gastamos esos 18,5 millones de euros cuando todavía no había ninguna desaladora construida por Acuamed de las adjudicadas por el Gobierno de Zapatero. Es más, una cuestión que estuve analizando fue que durante el verano de 2007 el Programa Agua estuvo repartiendo botellitas de agua, cuando Pedro Solbes decía que no, que no; que eso del sistema financiero, que no; que esa recesión no existía. O José Luis Rodríguez Zapatero decía que estábamos en la *champions league* de la economía mundial, que España estaba ahí y que ese barco no se iba a hundir. Estas eran las declaraciones cuando se estaban gastando ese dinero, no después. O sea, ahí la hemeroteca es dañina para todos.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que nos estábamos gastando 18 millones de euros, entre dinero público y dinero privado, en anunciar, en publicitar, en poner ante la opinión pública las excelencias de unas desaladoras que ni se habían empezado a construir.

Por lo que he leído de sus artículos, entiendo que la campaña publicitaria, aparte de multimillonaria —creo que eso queda suficientemente claro—, fue muy compleja; una campaña que no fue inmediata, sino que se desarrolló en fases. ¿Podría explicarnos cuáles fueron los mecanismos en los que se basaron y cómo funcionaron esas campañas publicitarias?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Yo tuve acceso a cómo funcionaron esas campañas a través de los informes de la UCO, uno entregado en enero de 2016 y otro, en octubre de ese mismo año. Yo no saco la información hasta diciembre porque es una información que no circulaba, porque era un sumario secreto. La cuestión es que ahí se habla de que en una primera fase —es lo que me llama la atención; yo creía que en los 7,5 millones de las cuentas públicas entraba ese dinero, que casi coincidía— las constructoras dieron casi 6 millones de euros. De hecho, la UCO hace un cuadro en el que se va detallando constructora por constructora, que son UTE, y cuál es el impuesto revolucionario, vamos a llamarlo así, del 1 % que pagan para la campaña publicitaria de la desalación del Programa Agua del Gobierno de Zapatero. En esa primera fase son aproximadamente 6 millones de euros. Pero gracias a ese informe de la UCO aparece una carta del director de relaciones institucionales de Acuamed, la persona que se define delante del juez Eloy Velasco, en una declaración como testigo, como el que diseña toda la campaña; o sea, podemos decir que es el cerebro de esta campaña de propaganda. Y en esa carta dice que, gracias al éxito absoluto que ha tenido la primera fase, en la que no se recoge ningún convenio en el informe, van a aprobar otra; y la aprueban justo cuando arranca la campaña electoral, en enero de 2008. Y son 1,2 millones de euros. Por eso me parece complejo, porque estamos hablando de que, hasta el mismo informe de la UCO, parece que todo el dinero público estaba dentro de lo que eran las donaciones

voluntarias de las constructoras. Pero luego descubriré que no, que ese dinero era aún mayor, que suma los 18,5 millones de euros.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Entre las empresas que realizaban estas campañas publicitarias, ¿sabe usted si se encuentra la empresa Crespo Gomar, S.L.?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Esa es la cuestión. En las donaciones voluntarias de las constructoras todo fue una adjudicación a Bassat. De hecho, la carta de la segunda fase es una carta dirigida a Bassat que dice: gracias al éxito que hemos tenido, vamos a hacer una segunda fase. Pero faltaba ese millón y medio, si pensamos que los 6 millones de las donaciones voluntarias estaban dentro del dinero público. Y cuando salta la financiación ilegal del Partido Socialista valenciano y aparece que Crespo Gomar y una filial suya, Silvia García —creo que es como se llama—, estaban siendo investigadas por trabajos con Acuamed en 2007, me dije: esto es lo que estoy investigando en la Audiencia Nacional; me voy a enterar del millón y medio que falta. Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que no solo son esos dos contratos firmados por la persona que dio el visto bueno a los de Crespo Gomar y Silvia García, sino que hay otros 54 contratos más. Esos 54 contratos suman los 11,2 millones de euros. Es la otra parte de la investigación, como si fuera un rejeo de la de Valencia, que se une con el caso Acuamed central. Estamos hablando de que hay dos contratos investigados que se ha descubierto que son irregulares, pero esa misma persona adjudicó otros 54 con el visto bueno de Adrián Baltanás, director general de Acuamed de aquella época. Yo no digo que sean todos ilegales porque no han sido investigados, pero, desde luego, es importante saber qué ocurre, porque nos hemos encontrado con que en el año 2007 los delitos han prescrito, pero aquí hay contratos de 2008. O sea, no solamente están los contratos de 2007, en los que a lo mejor el delito de financiación ilegal del Partido Socialista ha prescrito, sino que esos contratos de 2008 se podrían analizar y ver qué ocurre para saber si realmente pasa como con Crespo Gomar, que todo era una facturación ficticia, falsa.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que usted, tirando del hilo de Crespo Gomar, llega a los otros cincuenta y tantos.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí. Porque en un primer momento pensaba que los 7,5 millones de euros era el dinero de las donaciones voluntarias, pero me he vuelto a leer el informe de la UCO, y no lo dice explícitamente pero da la sensación de que ese dinero era ese otro. No hay una investigación clara sobre en qué se gastaron esos 7,5 millones de euros. Cuando aparece el caso de Crespo Gomar en Valencia y esos dos contratos, yo quiero conseguirlos y me digo: si es Acuamed, tengo que enterarme de cuáles son los dos contratos que hicieron para analizarlos con los de Bassat. Lo que no me esperaba era encontrar otros 54 contratos más firmados por la misma persona, por Joan Navarro, y con el visto bueno de Adrián Baltanás, iguales que los dos que están siendo investigados actualmente.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Efectivamente, como bien dice, la empresa Crespo Gomar, según dice un juzgado de instrucción de Valencia, es el centro de la trama de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana; y hoy ya no está siendo solo investigada en Valencia, sino que hay investigación en juzgados de Valencia, Gandía, Benidorm y Madrid, que sepamos, en este momento.

¿En qué se basa usted —en los artículos que hemos leído— para afirmar y sostener que un conjunto de empresas a las que Cristina Narbona adjudicó las desaladoras pagaron lo que —entrecorrimo— llama usted mordidas a Acuamed?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Vuelve a salir de ese informe —voy a buscar el cuadro—, en el que se hace una relación de todas las empresas que donaron ese dinero. Esto también está dentro del informe de la UCO. (*Muestra un documento*). Toda la información está dentro del sumario del caso Acuamed y este particularmente es del informe de la UCO. Los 56 contratos no están dentro del informe de la UCO. Eso ha sido tirando del hilo, por aparecer lo de Crespo Gomar.

Estas empresas donaron, dicen que voluntariamente, el 1 %, pero vas fijándote y no hay contrato ni tampoco ningún convenio cerrado. Lo que sí hay es una serie de llamadas, una serie de movimientos, y ese dinero tiene toda la pinta de que voluntariamente no se entregó; indiciariamente, vamos a decirlo así.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo que estamos viendo, sobre la base de lo que usted nos dice, es que una serie de empresas adjudicatarias de una serie de obras, todas relacionadas con la construcción de

desalinizadoras, entregan voluntariamente, sin existir ningún vínculo contractual, una cantidad que viene siendo más o menos del 1 % de la adjudicación a la empresa Acuamed, que es una empresa pública.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí. Es más, cuando empiezas a analizar los datos reales descubres que hay un correo electrónico que manda la secretaria del departamento de relaciones institucionales de Acuamed. Ese departamento —por lo que tengo entendido por lo que he leído en los informes— es el que lleva todo el tema de la propaganda y la publicidad y está dirigido por Joan Navarro. Como digo, hay un correo electrónico de esta secretaria, de Elena Arranz, con copia a él y a otra persona que estaba haciendo la campaña de las desaladoras, la asociación Aedyr, diciendo la relación de empresarios que ya están al corriente del tema y que lo que tienen que hacer es firmar una carta con la agencia publicitaria para ir adelante con la campaña de desalinización. Y cuando el juez Eloy Velasco le pregunta a Joan Navarro, que comparece como testigo en noviembre de 2016 para resolver dudas de este procedimiento, le dice que no, que no conoce ese correo electrónico. El correo tiene su copia y lo tengo aquí; además, es evidente que está con copia a él. De hecho, la misma secretaria reconoce que Joan Navarro era quien tenía toda la responsabilidad directa, que quizá consultaba con las personas de arriba, pero que la responsabilidad directa de todo era de él y el que hizo los cálculos y todas las anotaciones fue él, así como las llamadas telefónicas. Pero no solamente es porque esté este correo electrónico —que sí que está en el informe de la UCO—, sino porque dentro del sumario mismo hay un *excel* que se llama «El club de las desaladoras» y en ese club de las desaladoras vemos todos los movimientos que hace Joan Navarro —porque tiene su nombre dentro de los cuadritos de ese Excel, lo tengo aquí, pero está con letra pequeña y es complicado de analizar— y se va viendo que, efectivamente, esto no son donaciones voluntarias si tienes un plan de trabajo, a quién vas a llamar, cuál es la adjudicación, o sea, lo tiene totalmente organizado.

Todo esto está dentro del sumario y yo lo publiqué en un artículo que titulaba «El cerebro de la campaña dice que esto es un inmenso lío político». Porque no podemos olvidarnos de que la justificación para gastarse estos 18,5 millones de euros que le da Joan Navarro al juez Eloy Velasco en sede judicial es porque había un conflicto entre administraciones, ¿y cómo no iban a hacer una campaña para favorecer la desalación?, porque era un inmenso lío político. Pero es que estamos hablando de que parte de la campaña se aprobó justo cuando arranca la campaña de las elecciones generales, con lo cual, sí, era un inmenso lío político, pero entonces estamos haciendo desde una empresa pública, con dinero de todos, una publicidad a nivel político; o sea, está politizada.

Todo está en artículos que tengo aquí, luego los busco y se los paso.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Luego tiene dos componentes, según vamos entendiendo: una parte con cargo al presupuesto público...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, 11,2 millones de euros, que no es que estemos hablando de...

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que no es poco, pero ahí podríamos entrar en la crítica política de si en pleno inicio de la crisis era conveniente hacer ese tipo de acciones; pero no podríamos ir mucho más allá.

Sin embargo, hay una segunda parte que ya no es solamente una crítica política: es decir, una serie de empresas donan voluntariamente. Créame, yo no conozco a ninguna empresa que done voluntariamente, *gratis et amore*, y menos a una administración pública, una cantidad cercana a los 8 millones de euros.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Fíjese si soy mala, es lo que pasa con la caja B, que es lo que el Partido Popular tiene encima: las donaciones voluntarias que nadie se cree que fueran voluntarias. (*Rumores*). Esto es exactamente lo mismo, pero en menos de seis meses: 8,3 millones en dieciocho años y esto es 7,2 millones en menos de seis meses. Donaciones voluntarias de constructoras, a las que da la casualidad que se les adjudicaron desaladoras, pero que por la investigación de la Audiencia Nacional estamos viendo que las que dieron más dinero lo querían de vuelta, y preguntaban que cuándo les devolvían lo suyo. Esa es la cuestión.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: De todas formas, permítame que la corrija: supuesta caja B todavía, y hasta que no haya una sentencia.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No es firme, no es firme.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Porque, de momento, el caso de la caja B, si es que lo hay, está todavía por sentenciar.

Efectivamente, hay una serie de empresas que donan una cantidad importantísima en un corto espacio de tiempo, casualmente —y en política sabemos lo que son las casualidades— coincidiendo con dos campañas electorales —2007 y 2008— y sin saber qué esperan a cambio esas empresas. Porque, repito, no conozco ninguna empresa, esté o no esté en el IBEX, que done gratuitamente a la administración cantidades millonarias en euros. Por lo tanto, vamos a ir avanzando por ese camino.

¿Cómo se articula dentro de Acuamed —dice usted que tiene incluso papeles que se podrían ver— la petición de esas donaciones?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Ese correo electrónico es fundamental porque en él cuenta exactamente cómo están y, además, pone todas las constructoras. Figura el correo electrónico y el nombre de las personas: Técnicas Reunidas, Sacyr Vallehermoso, etcétera, salen todas.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Nos las ha de leer, aunque nos deje los papeles.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Lo que pasa es que está en letra pequeña: Acciona, Construcciones ALPI, Colpisa, etcétera. Es la lista de todas las constructoras.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y todas dan un porcentaje?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Claro, y luego está este cuadrito (*Muestra un documento*), que está pintado y se nota que son anotaciones de que vas llamando y vas tachando.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Van pagando y se las va tachando.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Claro, este es un documento de trabajo en el que aquí queda claro que las donaciones voluntarias no tenían pinta de donaciones voluntarias, como escribí en uno de los artículos diciendo que no solamente está el correo electrónico, que no solamente está ese cuadro de la factura, sino que están esas donaciones marcadas de «El club de las desaladoras».

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: «El club de las desaladoras» del Ministerio de Fomento de la ministra Narbona. Se ve que es usted periodista, ha hecho un buen titular: El club de las desaladoras de la ministra Narbona.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No lo digo yo, lo pone aquí arriba (*Muestra un documento*): «El club de las desaladoras». Me llamó la atención el *excel*.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea, que le han dado el titular hecho ya en el *excel*.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Totalmente; aquí, sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo quería atribuírselo a usted, pero si se lo dan las propias empresas hecho, estupendo.

Usted explica en sus artículos que, pasado el tiempo, algunas de estas empresas le empiezan a reclamar a Acuamed la devolución de las mordidas. La respuesta que obtenían de Acuamed era —y entrecomillo algo que he leído en alguno de sus artículos—: «Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona».

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Esa es una declaración que hace en sede judicial, ante el juez Eloy Velasco...

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿En sede judicial es esto?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, esto es en sede judicial. Carlos Massa, el director general que hereda la gestión de Adrián Baltanás, declara en sede judicial que esta campaña no estaba por escrito, que en el ministerio todos lo sabían y que hay un momento en el que si Narbona

prometió esto, que Narbona lo pague. Esta es una declaración que hace en sede judicial Carlos Massa, el que hereda la gestión de Adrián Baltanás, con lo cual es la persona que marca diciendo que era un concierto inapropiado y que, obviamente, durante toda su etapa tirará balones fuera. Porque a partir de 2008, Acciona, una de las constructoras, conforma una UTE en la desaladora de Torreveja, reclama los pagos voluntarios que había hecho —claro, eran 1,7 millones de euros— y entonces empieza a haber una serie de correos. Eso es lo que refleja el informe de la UCO y es la única de todas las constructoras que está siendo investigada por este movimiento de: Oye, devuélveme lo que entregué para publicidad. Y ahí se refleja que al final, obviamente, no era tan voluntario porque querían el dinero de vuelta. Carlos Massa dice: Oye, esto no tiene nada que ver con mi gestión; si lo prometió Narbona, que lo pague Narbona. O sea, es una declaración en sede judicial.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La verdad es que todo esto a una persona que tenga la cabeza mínimamente amueblada y esté acostumbrada a tratar con administraciones, bien sea desde dentro o desde fuera, le sorprende. Yo afirmaba antes: ninguna empresa de la que yo tenga conocimiento entrega gratuitamente a una administración una cantidad millonaria, salvo que esté sujeto a un contrato; es decir, a mí no me parecería extraño si en el contrato de adjudicación de la obra hubiera habido un capítulo que recogiera: para publicidad, tanto. Pero de no existir esto, el que en plan compadre, desde un ministerio se pacte con unas adjudicatarias de obras multimillonarias entregar un 1 % —entre comillas— «gratuitamente», porque luego se ve que ya no es gratuitamente...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): El sistema es más complicado. En una entrevista que publiqué en ABC le llegué a preguntar a Cristina Narbona si le estuvieron reclamando el reembolso del pago del impuesto revolucionario de las adjudicatarias de desaladoras, y me dijo que sí, que había un convenio —es decir, ella me menciona que hay un convenio— y que en ese convenio no se recoge ni una sola línea de que ese dinero se fuera a volver a entregar.

¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando Adrián Baltanás declara en sede judicial ante el juez Eloy Velasco, le pregunta por ese convenio y dice: Yo creo que tengo un borrador. O sea, el convenio yo no lo he visto, que a lo mejor está, pero no sale presente. De hecho, la UCO resalta muchas veces, que aquí no se recoge, que era muy ilícito dar esta cantidad de dinero sin haber ni contrato ni modificados. O sea, la cuestión es que hay un paso más allá. Todo esto se hace a través de Acuamed y otra empresa que se llama Aedyr; es decir, se supone que Acuamed le entrega 200 000 euros a Aedyr y Aedyr es la que va a llevar la campaña con Bassat. ¿Qué pasa entonces? Que el propio Joan Navarro, cuando declara en sede judicial, dice que todo el dinero que se entregó lo gestionaron ellos —eso es una declaración suya—. Y hay documentos dentro del sumario en los que ves que pone Aedyr, pero abajo, Atención: Joan Navarro. Con lo cual, tienes una sensación de que Aedyr sí estaba, sí que parecía que se estaba organizando todo a través de Aedyr, pero que Aedyr podría ser una tapadera de lo que se gastaba Acuamed, porque además la persona que llevaba la campaña lo reconoció delante del juez en esa declaración: que todo el gasto lo controlaban ellos.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En plena época electoral.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ha citado usted varias veces a Joan Navarro.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Actualmente, Joan Navarro es vicepresidente de asunto públicos de la empresa Llorente & Cuenca. ¿Usted sabe esto?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, sí, y de hecho el informe de la UCO también dice perfectamente cuál es el currículum de Joan Navarro y aparece que él está vinculado a Llorente & Cuenca.

Sobre Llorente & Cuenca no aparece nada en el informe de la UCO. ¿Qué ocurre? Que los 56 contratos que he comentado que son de los años 2007 y 2008, de los que hay dos investigados —firmados por Joan Navarro con el visto bueno de Adrián Baltanás—, de Crespo Gomar y Silvia García, hay también otros 4 contratos para Llorente & Cuenca, con una cantidad aproximada en esos años de 770 000 euros. Son 4 contratos para un servicio de prensa. Se supone que externalizan el servicio de prensa, cuando el

propio Acumed tiene un departamento de prensa. O sea, que serían contratos para una asesoría de prensa, hechos por el director de relaciones institucionales, que tiene un departamento de prensa. Pero bueno, esa es la vinculación.

Joan Navarro estuvo en Acuamed hasta finales de 2008, principios de 2009, no sé exactamente la fecha, y a los quince meses es cuando ficha por Llorente & Cuenca.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Llorente & Cuenca, Crespo Navarro, Bassat son empresas muy ligadas a la trayectoria socialista, por lo que vamos viendo.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Son consultoras de comunicación, agencias de publicidad. Yo estoy pidiendo esos contratos porque, claro, no me voy a quedar solamente en que sé que hay 56 contratos, sino que estoy intentando averiguar qué hay detrás de esos contratos antes de que prescriban los delitos. Quiero averiguar si realmente eran todas asesorías de prensa o cuál es el objeto de esos contratos.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perdóneme que haga un inciso.

¿Y a usted no le extraña que sea usted la única —bueno, ahora estamos nosotros también— que está investigando estas cuestiones? De todo esto que ha salido ya publicado, ¿no tendría que haber una organizada, una perfecta y minuciosa investigación?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Si midiéramos todo con la misma vara, esto para mí es un escándalo, porque por eso empecé a tirar del hilo. Yo no me pongo a mirar las desaladoras porque sí —desde luego, no es lo más bonito decir que estoy investigando desaladoras—; empiezo porque veo que hay un dinero público que no me cuadra que se gaste en unas fechas. Pero, aparte, cuando empiezo a tirar del real decreto de 2004 —me hice mi propio cuadro—, me pregunto cuáles son las desaladoras que se han aprobado y las que no. Me hago un listado y encuentro cuáles son las desaladoras que se aprobaron, y de la mitad de las desaladoras aprobadas en el 2004, la mitad no funcionan. Claro, a mí eso me llamó más la atención.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿A día de hoy?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): A día de hoy, 4 no funcionan. Hay una, que es Bajo Almanzora, que está desmantelada —palabras de los técnicos— porque hubo unas riadas en septiembre del 2012 y se la llevó de por medio —esa es una de las desaladoras investigada por la Audiencia Nacional—, y luego hay otras tres, que son la de Sagunto, en Valencia, y las de Moncofa y Oropesa del Mar, que no se han puesto en marcha nunca. Yo me hice ese recorrido por Valencia y por Castellón para ir a las localidades que están vinculadas con estas desaladoras y ninguno de los alcaldes —da igual de qué partido político sea— quieren ponerla en marcha porque hay una cuestión muy grave: enseguida que le den al botón, tienen que pagar un millón de euros durante 25 años solamente para amortizar la infraestructura, no estamos hablando de consumo. O sea, imagínese los municipios de Moncofa y Xilxes, que no llegan a 9000 habitantes, encontrarse con la factura de los 25 millones de euros de la desaladora. Ese es el problema.

Y hay más, porque esas cuatro desaladoras que no funcionan, una por desmantelada y tres porque nunca se pusieron en marcha, fueron una inversión de 245 millones. Aquí empezamos a sumar y, claro, a mí me da que esto es un despilfarro que debería ser investigado porque hay otros casos, y por lo que arranca el caso Acuamed te da la pista de que debería ser por aquí por donde también deberían tirar en la Audiencia Nacional. Pongo un solo ejemplo: en el auto de prisión, que es de enero de 2016, meten a una serie de personas en la cárcel y uno de ellos es por la obra del Serpis, un canal que tienen que hacer para la presa, y dice el juez Eloy Velasco que no hay trabajos arqueológicos y que ha habido un sobrecoste de 2 millones de euros. Pero te vas al sumario y en informes y documentos de la UCO te encuentras con 2 informes de más de 500 páginas firmados por 4 arqueólogos, que dicen que se recogieron más de 6000 piezas y que se mandaron al Museo Arqueológico de Gandía. Entonces, te preguntas: ¿Y tú estás investigando 2 millones de euros de sobrecoste porque dices que no había trabajos arqueológicos y aquí están los 2 informes, firmados por arqueólogos, con las ánforas enviadas a un museo, y dices que esto no es así? O sea, han metido a una persona en prisión preventiva, cuando nos encontramos que hay un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los años socialistas en el que se demuestra que hay unos sobrecostes de 215 millones de euros y nadie... Si seguimos el mismo criterio que siguió para meter

en prisión preventiva a este empresario y a otras personas por otros casos, estaríamos en las mismas. ¿Por qué no se investiga esto siguiendo el mismo criterio de inflado? Porque eso fue inflado por 2 millones y aquí estamos hablando de 215.

Pero es que, aparte, vas a ese informe del Tribunal de Cuentas —que no me lo he sacado de la manga, que también está dentro del sumario— y resulta que hay otros 9 millones de euros de proyectos fallidos de desaladoras en distintas localidades en los que al final no se pusieron de acuerdo, pero el dinero se entregó. Incluso, para una de las desaladoras —perdonadme que no me acuerde del nombre, pero está en uno de los artículos— se llegó a poner en los Presupuestos Generales del Estado 30 millones para gastos de esa desaladora y se gastaron al final 2,2 millones de euros; pero, obviamente, se fue, se quedó en nada.

Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque llevo tiempo escuchando al Partido Socialista decir que apuesta por las desaladoras. Y la cuestión es: ¿apuesta por las desaladoras para solucionar este problema o apuesta por las desaladoras para construir más y tener más problemas? Es la cuestión.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hombre, siempre y cuando haya pingües beneficios para alguien, no sabemos quién, a costa de las desaladoras, pues podemos seguir así, efectivamente, y el Ebro salvando el agua.

¿Cuánto ha supuesto el sobrecoste de las desaladoras?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): El Tribunal de Cuentas, hasta el año 2011, en ese informe de fiscalización —que lo puedo aportar—, habla de 215 millones de euros en 6 desaladoras. No tenemos el siguiente informe, es decir, el que iría de 2012 en adelante. Hasta ese momento, con las que se estaban construyendo, el sobrecoste es de 215 millones y 9 millones en proyectos fallidos. Esto está en dos artículos que publiqué en ABC y que os entregaré.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Sabe usted que hay una ayuda de la Unión Europea a la construcción de desaladoras y que esa ayuda tiene un plazo de vigencia, y que si no estuvieran construidas y funcionando en ese plazo de vigencia habría que devolver el dinero a la Unión Europea?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): ¡Hombre, claro! Yo lo he escrito por activa y por pasiva, porque hice esos reportajes recorriendo las localidades que tienen el problema de: no queremos poner en marcha la desaladora porque no podemos pagar la factura del agua. Resulta que al final habrá que buscar una solución y yo creo que las desaladoras las vamos a pagar todos. Incluso, en una entrevista a Cristina Narbona le comenté que eran contratos leoninos y me dijo: Bueno, nadie les puso una pistola en la cabeza. (*Rumores*). Bueno, nadie les puso una pistola en la cabeza pero aquí hay unos contratos y, por ejemplo, en marzo de 2019, de nuevo en época electoral —estaremos en las elecciones municipales y autonómicas—, si no se han puesto en marcha estas tres desaladoras fantasma, como yo las califico, la de Sagunto, la de Oropesa y la de Moncofa, tendremos que devolver 35 millones de euros a la Unión Europea por esos fondos que se entregaron en su momento.

O sea, el problema no es que fuera una mala gestión, sino que todavía vamos a arrastrar esa mala gestión que hay que solucionar. Por eso no cejo en este tema.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que tenemos 200 y muchos millones de sobrecostes, 18 millones de euros en publicidad de distinta procedencia, 35 millones más que va a costar al Estado español de devolución, ¿nos ha dicho que el año que viene?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Marzo de 2019 es el plazo último que tenemos para ponerlo en marcha.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: 35 millones de devolución y al final lo que tenemos claro es que en el verano de 2007 la ministra Narbona repartió botellitas por las playas al coste de un euro la botellita.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Toda esta campaña se aprueba en el Consejo de Ministros, creo recordar que del 12 de septiembre del año 2007, en el que Cristina Narbona consigue que se apruebe esta campaña para contar las bondades de la desalinización. Se llamaba «El mar, fuente inagotable de vida», pero esto es en septiembre. Por este contrato podemos ver que antes ya había acciones publicitarias, porque si se aprobó en Consejo de Ministros en el mes de septiembre eso ya no

es verano, es el final del verano y, obviamente, esa campaña no entraría dentro de la de Bassat. No sé exactamente dónde estaría, tal vez sería parte de los contratos que todavía hay que analizar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Toda esta información que usted tiene y que nos ha dado, incluidas las desaladoras fantasma, las que no funcionan, las que estaban proyectadas y no funcionan, las que estaban proyectadas y no se han construido a día de hoy, etcétera, con todo este revuelo de dinero público y privado, según nos dice esto es parte de un sumario. ¿Pero este sumario realmente está yendo hacia delante, se está investigando? ¿Qué conoce usted de esto?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Aparte de estos dos informes que he mencionado de la UCO en los que se cuenta todo lo que es la campaña publicitaria y también este sistema de mordidas o de impuesto revolucionario o de donaciones voluntarias —a ver con cuál de estas palabras nos quedamos— que se puso en marcha con una desaladora, la de Torrevieja, más allá de declaraciones puntuales dentro de la Audiencia Nacional, con testigos que fueron a declarar, obviamente —como ya he dicho, la secretaria Elena Arranz, también fueron a declarar Joan Navarro y Adrián Baltanás en noviembre de 2016—, uno tiene la sensación de que no haya mucho más. Encontré que, efectivamente, en abril de 2017 la fiscalía había pedido los expedientes de las tres desaladoras fantasma —que se los puedo aportar— para investigar, pero movimiento no hay. Dentro de la Fiscalía Anticorrupción, creo que es la fiscal Inmaculada Violán la que lleva esta información, y lo mismo que yo he tirado de los informes de la UCO de enero y octubre de 2016, si se investigase se acabaría llegando a esta conclusión, y es que, aparte de las supuestas mordidas que se querían volver a reembolsar, hay un gasto en campaña publicitaria desorbitado que se vincula a una investigación abierta que saltó en Valencia. Con lo cual, habría que moverlo, habría que tratar de que esto no prescriba. A lo mejor no hay absolutamente nada, indiciariamente estos son los datos, pero da la casualidad de que la misma persona que firmó aquellos que estaban investigados firmó otros cincuenta y cuatro más, y al final fueron 18,5 millones de euros los que se gastó la empresa pública, con donaciones incluidas.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Para ir terminando, usted denunció también el desvío de fondos públicos en el caso de la desaladora de la planta de Torrevieja.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, sobre un informe de la Agencia Tributaria que está dentro del sumario, en el tomo XV, a partir de la página 5526, creo recordar, porque cuando salta el caso de Acuamed se dicen: Hombre, dentro de estas personas que está investigando la Audiencia Nacional, el que estaba adjudicando las desaladoras, que se llama Fernando Troyano, resulta que creó una empresa con su mujer y desvió fondos de la desaladora de Torrevieja por 280 000 euros. Y este es un informe completo de la Agencia Tributaria en el que va detallando esas empresas pantalla que crea Fernando Troyano para este desvío de dinero. ¿Qué ocurre? Que ese informe lo entrega la Agencia Tributaria en 2016 y a Fernando Troyano no le han llamado a declarar. Pero es más: Fernando Troyano forma parte de otro sumario, del caso Lezo, donde está investigado por la compra del Canal de Isabel II porque hizo unos informes. O sea, que esta misma persona, en tema de agua, está en el caso Lezo y está en el caso Acuamed, pero nadie le ha llamado para investigarle, cuando existe este informe de la Agencia Tributaria que es demoledor porque cuenta que ha habido un desvío de fondos y Fernando Troyano era, curiosamente, el que adjudicaba las desaladoras en la época de Adrián Baltanás, en la época socialista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le repito la pregunta, aunque ya nos ha dicho que sí: ¿Toda esta información que ha citado sí nos la va a poder dejar?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, claro.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En fin, ha dado usted datos más que suficientes y de todo lo que nosotros habíamos subrayado del conocimiento que teníamos de su investigación, pero aunque solo sea por dar una pincelada, hace usted hincapié en la devolución de las mordidas de la desaladora de Águilas...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí, claro, porque en ese cuadro aparecen todas las constructoras que donaron dinero y solo se está investigando a Acciona por la desaladora de Torrevieja, y hay un momento en que el informe de la UCO dice: No se tiene constancia o datos de que esta operativa

fuera igual con las otras empresas. Pero, claro, hay una denuncia entregada en la Audiencia Nacional que recoge que no es que no tuvieran la misma operativa, sino que resulta que estos sí consiguieron el reembolso modificando contratos, y aportó una serie de pruebas diciendo que por qué no se investiga también, igual que se está haciendo con la de Torre vieja, la desaladora de Águilas porque aquí fueron 1,2 millones de euros los que donó la constructora, en este caso Ferrovial y Sacyr, y también pidieron su reembolso. Es una denuncia entregada en la fiscalía en la que se dice que aquí solamente se está investigando Torre vieja, pero no sabemos si las demás constructoras también pidieron de vuelta de ese dinero, con lo cual al final la campaña no la pagaron voluntariamente las constructoras, sino que la pagamos todos involuntariamente.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Usted cuál cree que es el papel que ha jugado la ministra entonces Cristina Narbona en toda esta trama de mordidas, de contratos extraños? Y digo lo de extraños porque son extraños: esto de que no se recojan las cantidades que hay que implementar en publicidad en el propio contrato de la adjudicación y que haya que darlo voluntariamente, esto es extraño.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Yo cuando le pregunté a ella personalmente me negó que esas donaciones volvieran a entregarse; de hecho, me dijo que no había ningún convenio en que se recogiera ninguna de esas líneas. De lo que sí queda constancia es de que el Consejo de Ministros sí aprobó la campaña de desalinización, de publicidad de estas desaladoras, que no estaban puestas en marcha porque era un inmenso lío político.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto es lo que dice...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): El inmenso lío político lo dice el cerebro de la campaña.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: El cerebro de la campaña.

Por resumir y para terminar —aparte de que tenga algo más que añadir—, lo que usted ha planteado aquí es que en un periodo muy concreto del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, en plena crisis o cuando la crisis está a punto de hacer acto de presencia en nuestro país, coincidiendo además con la celebración de dos procesos electorales, 2007 y 2008, se suscriben una serie de contratos de publicidad más que dudosos, puesto que una parte del dinero de la publicidad proviene de la propia Administración, y se produce un salto de una media aproximada de 200 000 o 300 000 euros anuales en ese capítulo presupuestario, pasando a 8-9 millones en los años 2007 y 2008. Pero no solo eso, sino que, además, a ese dinero se le añade un dinero procedente —sin soporte documental, sin soporte contractual, de otro tanto hasta alcanzar la cifra de 18 millones, redondeando los datos— de las empresas privadas adjudicatarias de las obras de las desalinizadoras; dinero que al no estar sujeto a ningún contrato público ni privado...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): El contrato es con la agencia publicitaria, pero no con las constructoras; se supone que es donación voluntaria, pero el cuadro demuestra que había un control.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero la procedencia no está contemplada en el contrato de adjudicación.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por tanto...

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No, ni en ningún modificado ni en el contrato ni nada. Por eso la UCO dice que eso sería ilícito totalmente porque es una campaña extracontractual; esa es la palabra, extracontractual.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A eso me refiero.

Primera cuestión. Hasta sumar una cifra aproximada de 18 millones de euros que se gastan —hago hincapié en el término gastan— en publicidad en un periodo de apenas dos años, durante los cuales se celebran dos procesos electorales sin ningún control contractual de esas cantidades.

Segunda cuestión. A partir de la investigación que usted realiza y que la propia UCO realiza y envía a los tribunales, se producen lo que se ha denominado mordidas de esas empresas, que tienen que abonar

sin contrato previo, como hemos dicho, en torno al 1 % de la adjudicación que tienen por el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona, y que, posteriormente, intentan recuperar, unas con más éxito que otras. Esto es lo que se ha denominado mordidas, y también en el mismo periodo.

Y, por último, cabe señalar también el despilfarro que se produce en toda esta gestión ministerial de Cristina Narbona, en que el trasvase del Ebro previsto en aquellos años se sustituye por la construcción y puesta en funcionamiento de una serie de desaladoras, con un sobrecoste de más de 200 millones de euros; sin embargo, no se construyen o no se ponen en funcionamiento ni la mitad de las desaladoras —aparte del sobrecoste, con la publicidad que hemos dicho—, y con el agravante de que, a día de hoy, siguen sin funcionar, y ni los ayuntamientos se pueden hacer cargo de las que, presumiblemente, podrían funcionar, ni se puede evitar la devolución de 35 millones de euros a la Unión Europea que se habían obtenido como ayuda para su construcción.

Por tanto, tenemos: publicidad totalmente exagerada y fuera de lugar en época electoral; mordidas de las empresas, que se denominan así por no estar sujetas a ningún contrato previo ni posterior; y, por último, todo ello abonando el despilfarro enorme en una época y en un periodo de crisis inmenso que había en España con la construcción de unas desaladoras que, después de todos estos años, no están funcionando.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Y se gastaron ese dinero cuando no estaban construidas. Uno de los argumentos que utilizan es que las administraciones del Partido Popular pusieron trabas para la construcción de esas desaladoras y por eso fue el inmenso lío político, por eso se empezaron a retrasar y por eso son los sobrecostes. Ese es uno de los argumentos. Puede ser en la desaladora de Torrevieja o en la de Águilas, pero esas dos están funcionando. Hay que resaltar algo que también cuento en los reportajes que he publicado en ABC —me enteré in situ, cuando estuve en las localidades que tienen desaladoras y que no las quieren poner en marcha—, y es que los proyectos los impulsaron —me lo contó Eric Segarra, de Izquierda Unida— personas de ayuntamientos socialistas, y me mencionó dos nombres: José Isach, antiguo alcalde del Partido Socialista de Moncofa, y Francesc Colomer, del Ayuntamiento de Benicàssim, que actualmente es el secretario autonómico de Turismo de Ximo Puig. Aquí la cuestión es que, efectivamente, podemos entrar en el juego de: tú no me dejaste..., por eso el sobrecoste... No sé exactamente por qué son esos sobrecostes, lo que sí sé es que las desaladoras que no funcionan se instalaron en ayuntamientos que en aquel momento eran socialistas, y la cuestión está en ver qué ocurre con esos ayuntamientos que no pueden asumir —y, además, hacen un llamamiento porque nadie les escucha— un millón de euros durante veinticinco años solo por la infraestructura.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Quiere usted añadir algo más?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): No, es que me había dado cuenta de que no lo había dicho.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. ¿Le queda algún artículo por publicar sobre esto?

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Quiero analizar esos 56 contratos.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien, pues más allá de donde llegue el asunto judicialmente, yo la animo a que los publique, porque no se nos olvida que usted empezó investigando al Partido Popular y terminó aquí, lo cual, a nuestros ojos, al menos, la dotan de credibilidad.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de ABC): Sí.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Todo esto, señora presidenta, ligado a empresas que estamos investigando en esta comisión tan denostada por el Partido Socialista, tan ligadas al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, tan sospechosas que aparecen en uno, en otro, en otro auto judicial, y que todas, todas, tienen un común denominador, y es la financiación electoral del Partido Socialista Obrero Español.

Vamos a seguir por este camino. No sé cómo podremos trabajar las próximas fechas, pero intentaremos hacer compatible el trabajo de esta comisión con el trabajo importante de presupuestos, pero que nadie dude de que esa ampliación de un año que hemos pedido para continuar nuestros trabajos, hoy más que nunca, fíjese, hoy más que nunca, está avalada por las últimas decisiones que ha tomado el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha abierto expediente —tal como nosotros preveíamos que podía pasar, y así lo hemos dicho en el transcurso de esta comisión— a dos partidos que han sido investigados

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos

Núm. 298

7 de junio de 2018

Pág. 15

aquí: a Ciudadanos, que quería limitarlo todo a errores administrativos —bien, pues hoy se le ha iniciado un expediente en el Tribunal de Cuentas por faltas graves— y, curiosamente, a Compromís, que tantas lecciones nos ha dado a todos y tantos días de gloria nos va a seguir dando.

Por tanto, señora presidenta, con más ánimo que nunca, este grupo parlamentario, esperamos que contando con algún otro que se incorporará a la comisión, va a seguir en los próximos meses con la investigación, que, al final, es el objetivo que perseguíamos, y consideramos que, avalado por lo que va a saliendo y se va conociendo, más que nunca debe continuar adelante.

Muchas gracias a la compareciente. (*Aplausos*).

La señora BERNAL GALLERO (periodista de *ABC*): Muchas gracias.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le agradeceremos, además, toda la documentación que nos aporte. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Aznar.

Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que en cualquier democracia occidental que se precie la libertad de prensa es un lujo. Yo siempre he pensado que, dentro de la libertad de prensa, el periodismo de investigación no puede faltar. Le doy las gracias a la señora Bernal Gallero por su comparecencia. La felicito y la animo a que siga investigando, porque, de verdad se lo digo, nuestro país y nuestro sistema democrático necesita de investigaciones como la suya.

La señora BERNAL GALLERO (periodista de *ABC*): Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Concluido el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y diez minutos.